

Una década de acciones colectivas negras frente al racismo institucional en Bogotá D. C.

CARLOS ANDRÉS MEZA
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
COLOMBIA
Correo electrónico: cmeza@icanh.gov.co

Fecha de envío: 03-12-2020 / Fecha de aceptación: 23-04-2021.

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo analizar las acciones colectivas de las organizaciones negras en un contexto de políticas, programas y prácticas institucionales que han resultado en mayores tasas de pobreza, despojo, criminalización y mortalidad para las poblaciones negras. Con base en registros etnográficos elaborados en diferentes momentos, planteo que en la última década las acciones colectivas negras en barrios populares de Bogotá han transitado de la mediación organizativa hacia formas más locales, espontáneas y efímeras de resistencia a los vastos efectos del racismo institucional que hace estallar conflictos socio-raciales entre los que se destaca la violencia y el abuso policial en entornos habitacionales precarios.

PALABRAS CLAVE: acción colectiva, organizaciones negras, discriminación racial institucional, racismo institucional

A decade of black collective actions against institutional racism in Bogotá

ABSTRACT

This article aims to analyze the collective actions of black organizations in a context of policies, programs and institutional practices that have resulted in higher rates of poverty, dispossession, criminalization and mortality for black populations. Based on ethnographic data produced at different moments, I suggest that in the last decade black collective actions in popular neighborhoods of Bogotá have moved from orga-

nizational mediation toward more local, spontaneous, and ephemeral forms of resistance to the vast effects of institutional racism that sparks socio-racial conflicts, among which violence and police abuse in precarious living environments.

KEYWORDS: Collective action, black organizations, racial discrimination, institutional racism

INTRODUCCIÓN¹

En Bogotá, Colombia, la conformación paulatina de clases medias negras urbanas se dio a lo largo de todo el siglo xx, impulsada por procesos previos de ascenso social regional. Así, la primera generación de migrantes chocoanos, nortecaucanos y caribeños —especialmente desde Cartagena— llegó a Bogotá en los años treinta y cuarenta, a estudiar y a ocupar cargos públicos de prestigio. Se trataba de profesionales mulatos y negros cartageneros provenientes de familias que lograron negociar un puesto social en la segunda mitad del siglo xix (Urrea 2011) y del ascenso social promovido por la próspera economía de subsistencia de las familias campesinas en el valle geográfico del río Cauca también a finales del xix (Taussig 1979). Posteriormente, ocurrió la migración chocona a la cabeza del poder político regional, con altos capitales escolar y cultural entre las décadas de 1930 y 1960 (Urrea 2011; Castro y Meza 2017). Esas generaciones precedentes de clases medias negras son evidencia de una interacción mantenida entre las regiones afrocolombianas con la urbe capitalina a partir de trayectorias de ascenso social restringido, conformación de intelectualidades, plataformas ideológicas etnopolíticas de combate al racismo —como la desplegada por Diego Luis Córdoba Pino en el movimiento choquista de los años cuarenta— y experiencias de formación universitaria y ejercicio profesional, de las cuales derivan también una población negra nacida en Bogotá de estrato medio y alto (Urrea 2011, Maguemati *et al.* 2012, Pisano 2010).

1 En este artículo estamos usando el sistema de citación del manual de estilo de la Universidad de Chicago.

En contraste con la inserción gota a gota asociada a niveles medios y altos de escolaridad, vínculos familiares con gente blanco-mestiza y dispersión por la ciudad, en las últimas dos décadas del siglo pasado –ochenta-noventa– y en los primeros veinte años del siglo actual, la inserción urbana es precaria, con ausencia de ciudadanía para una mayoría de las poblaciones negras y en consonancia con la invención de un imaginario de gueto urbano (Agier *et al.* 2000, 6). Con tendencia a nuclearse en sectores residenciales de estratos medio y bajo, esta población presenta niveles más bajos de escolaridad y una movilidad geográfica y social que ya no se inscribe tanto en las dinámicas de ascenso social negro, sino en la precariedad, el desclasamiento y la falta de oportunidades de regiones como el Chocó y el Pacífico sur, que en las últimas décadas se convirtieron en teatros de guerra y saqueo acentuado. Lo interesante para el caso bogotano es que en él media una narrativa urbana sobre la «inexistencia» de negros en la capital y de su «aparición» a finales de siglo (Mosquera 1998).

Comienzo poniendo en evidencia este contraste entre la invisibilidad e inserción de las clases medias negras urbanas del pasado con la sobrerrepresentación de las figuras de desplazado, el migrante, el sujeto aparte entre las clases negras urbanas empobrecidas en las principales ciudades del país, con el fin de abrir una reflexión sobre la estructura racializada en Colombia en donde la negrura sigue estando fuertemente asociada con el espectro socioeconómico más bajo en la estructura de clases (Wade 2008). Las diferencias de clase en la población afrodescendiente se evidencian en la movilidad ascendente de unos pocos, mientras una vasta mayoría languidece en la desesperación causada por las desigualdades económicas.

Este artículo tiene como objetivo analizar las acciones colectivas de las organizaciones negras en medio de un agravado problema de discriminación racial en varias localidades del Distrito. A principios de la década de 2010, varias de esas organizaciones denunciaron las carencias en los temas de empleo, vivienda, educación y seguridad, creando espacios de convergencia tales como la Federación de Organizaciones Afrocolombianas de Suba y las mesas afro de Antonio Nariño, San Cristóbal y Ciudad Bolívar, que

fueron reconocidas por las instituciones del Distrito como instancias mediadoras de la acción institucional. Me propongo mostrar cómo en los últimos diez años las acciones colectivas negras en barrios populares de Bogotá han transitado de la mediación organizativa para demandar mayor atención institucional, hacia la fragmentación de las organizaciones, así como formas espontáneas y fugaces de resistencia a los vastos efectos del racismo institucional que hace estallar conflictos sociorraciales entre los que se destaca la violencia y el abuso policial en entornos de precariedad habitacional.

En la primera parte de este artículo partiré de una orientación conceptual basada en las nociones de acción social colectiva y racismo institucional en tanto son categorías que remiten a la tensión entre la agencia de los movimientos negros y la estructura social racializada. La segunda parte explora casos puntuales de racismo institucional asentados en el abuso policial y la precariedad habitacional en los que el discurso de la peligrosidad y la criminalidad de la gente negra legitiman agresiones y vigilancias estrictas. Al observar los principales problemas de la comunidad negra hoy en día en Bogotá, nos encontramos acciones colectivas más localizadas de contestación y confrontación radical a los problemas habitacionales y al abuso policial en entornos barriales de asentamientos negros. A diferencia de los primeros años de este último decenio, encontramos que estas resistencias al sometimiento y la opresión sociorracial no pretenden elevar reclamos ni decantarse como estrategias organizativas que busquen acceder a espacios formales de participación política acordes con los marcos legales y jurídicos del reconocimiento pluriétnico y multicultural y de lucha contra la discriminación. Son explosiones radicales de descontento que dejan ver su poder de lucha, organización y gestión cuando el racismo imperante se hace insoportable.

ÓRDENES RACIALIZADOS Y ACCIONES COLECTIVAS

La ausencia de identidades raciales claras, la existencia de ideologías hegemónicas que alimentan el mito de la democracia

racial, junto con la desvalorización de lo negro y la negritud, caracterizan la práctica del racismo en América Latina (Wade 2008, 184). En América Latina, la coexistencia y el entrelazamiento del mestizaje y el racismo da un giro particular a la construcción de la raza, haciendo que las nociones latinoamericanas de raza sean particularmente culturalizadas y abiertas para ser pensadas y experimentadas a través de la clase, la región, la sexualidad de género e incluso las políticas de la etnicidad. Desde la perspectiva de la formación racial, entendida esta como un proceso por medio del cual las fuerzas, sociales, económicas y políticas determinan el contenido y la importancia de las categorías raciales (Omi y Winant 1994, 105), la raza en Latinoamérica ha funcionado a través de otras percepciones naturalizadoras y culturalizadoras sobre la evaluación moral del comportamiento, el estatus, la vestimenta, la procedencia y el habla, además de las apariencias fenotípicas. Aunado a la percepción del color, todo esto moviliza esquemas cognitivos incorporados, normas sociales implícitas, valores culturales difundidos; revela mecanismos de atribución de estatus, de clasificación del otro y relaciones de dominación que hacen del color de piel negro de las personas un signo cargado de significados (Cunin 2003, 8; Segato 2010, 555-557).

Partimos del hecho según el cual la raza y el racismo se inscriben y configuran en instituciones fundamentales, tales como Estados, economías, universidades y familias (Laó-Montes 2010, 288). La racialización es un proceso determinado por la capacidad que tienen el color y el fenotipo en incidir sobre aspectos económicos, laborales, políticos y sociales (Stolcke 1995, Cunin 2003, Segato 2010, Bonilla-Silva 2010). La racialización es también un mecanismo estructural que permite concentrar la riqueza e implementar desigualdades políticas por la activación de dispositivos, modos y formas de instaurar, concretar o desacelerar políticas que acarrear graves consecuencias para las poblaciones discriminadas (Dunaway 2003). La dinámica y los procesos de racialización que se han dado en América Latina han determinado los modos y las formas de instaurar y concretar políticas raciales (Rodríguez Mir 2012, 47). El nivel de racialización de una sociedad puede deter-

minarse por las brechas de desigualdad racial dentro de ese sistema social. Cuanta más desigualdad racial haya, tanto más racializado estará el sistema (Bonilla-Silva citado en Mosquera 2010, 87).

La impronta de la discriminación racial institucional y sistemática practicada en muchos regímenes coloniales y la forma como ese legado se materializa en las sociedades actuales es lo que nos permite poner de relieve la noción de racismo institucional o racismo estructural (Smedley 1993 citado en Wade 2008, 178). El racismo institucional será entendido como una forma de violencia metapolítica de Estado, dinámicamente simbólica, la cual ha estructurado en la larga duración un sistema de valores que discrimina, diferencia y excluye mediante la invisibilidad, el ocultamiento, la negación, la omisión y la estereotipia (Maya 2009, 219). La discriminación de forma sistemática ocurre en las políticas, programas y prácticas de instituciones públicas y privadas que resultan en mayores tasas de pobreza, despojo, criminalización, enfermedades y mortalidad para las poblaciones negras, lo que deja en evidencia las desventajas de las personas negras en salud, educación, economía y política, y en el campo judicial. El foco puesto en lo institucional, lo estatal y lo estructural se aleja estratégicamente de los análisis convencionales que reducen el racismo a las intenciones y acciones de los individuos implicados (Taylor 2017, 16, 188).

Cuando la discriminación es antigua, esto es, anclada de manera profunda en las estructuras sociales, políticas, mentales y simbólicas, los mecanismos de exclusión son percibidos como naturales, por tanto, no actuar desde la acción pública estatal conduce a reforzar la exclusión y las desigualdades (Kessler 2004, 9, 36, citado en Mosquera y León 2009, 2). La discriminación racial en esferas cotidianas y de relaciones sociales pasa por el juzgamiento de los cuerpos, las sexualidades y los comportamientos de hombres, mujeres y jóvenes desterrados y otros que han crecido en el destierro, en calidad de parias y víctimas (Mosquera 2010, 73). En las esferas institucional y política, esa discriminación racial se expresa en la falta de reconocimiento por parte de las autoridades gubernamentales acerca de la existencia del problema en sí mismo, así como en el desconocimiento y la poca participación en la

toma de decisiones ofrecida a la población negra en los procesos de formulación de políticas públicas y en la elaboración de planes de desarrollo nacionales, departamentales y municipales (Mosquera 2010, 26). La discriminación racial en las esferas institucional y política está ampliamente caracterizada por manifestaciones inconscientes o actitudes, ademanes y modales que son el resultado de costumbres o de rutinas interiorizadas y arraigadas social y culturalmente, y cuya connotación discriminatoria, por consiguiente, no es visibilizada o reconocida como tal, así como tampoco es necesariamente verbalizada o sacada a la luz a través del discurso, salvo en algunas excepciones.

El racismo es un régimen de dominación que tiene tres dimensiones: racismo estructural, racismo institucional y racismo cotidiano (Laó-Montes 2010, 304), dentro de las cuales gravita el prejuicio y la discriminación aprendidas y reforzadas principalmente a través del discurso público que es agenciado por las élites. Es así como las élites y las instituciones son centrales en la producción y reproducción del racismo. Los debates parlamentarios, las noticias de prensa y televisión, los libros de texto en escuelas y universidad, el documento burocrático y el lenguaje de la administración pública y de las estructuras coercitivas, configuran un corolario de retóricas, decisiones y políticas sobre la raza que tienen como propósito subordinar y controlar (Van Dijk 1993, 17).

La perspectiva de los ciclos raciales articula un amplio marco para el análisis histórico de la política negra en el continente americano, en la medida en que combina la importancia social de las coyunturas críticas y la agencia histórica afro. El concepto de ciclos raciales connota una temporalidad dinámica de la relación entre el Estado racial y la agencia de los movimientos negros como impulsores del flujo y reflujo histórico entre momentos de transformación política (Sawyer 2006, 1-2). La forma en que estos órdenes racializados soterrados pueden ser identificados y descubiertos depende en gran medida de la agencia de aquellas personas y organizaciones que impugnan las exclusiones racializadas. La continuidad espacial e histórica del fenómeno hace que una reserva de experiencias previas o repertorios de confrontación

con un conjunto de prácticas y estrategias broten en determinados momentos y contextos (Tilly 1978). La discriminación racial en las esferas institucional y política, con sus efectos en la vida social, es entonces una precondition de la acción colectiva. Pero más que acción sostenida en el tiempo, conexas a la movilización social. Me interesa acotar esa noción en los momentos en que la discriminación racial se ha tornado tan insoportable que ese estado de cosas acarrea un llamado a la acción para buscar soluciones concretas. La acción social colectiva es una orientación intencional conjunta, clave en la comprensión de cómo se colectiviza un interés y cómo se movilizan estrategias y recursos. Es el producto de la interacción que se genera entre los actores que participan de la confrontación, así como de la definición que estos hacen del campo en el que tiene lugar su acción y de sí mismos (Melucci 2002).

Las cambiantes dinámicas raciales y económicas llevan a pensar no solo en la metamorfosis de las acciones colectivas. El relativo éxito o fracaso en el posicionamiento de intereses de los colectivos accionantes en las agendas políticas de los gobernantes, el endurecimiento de discursos y prácticas racistas, las dinámicas demográficas metropolitanas y las diferencias generacionales entre viejos y nuevos liderazgos son factores que señalan la fluidez, la vitalidad, el declive y las transformaciones en la forma como se ejercen reclamos y demandas a funcionarios y entidades estatales y en la manera en como ciertas dinámicas comunitarias y organizativas trabajan para hacerle frente a escaladas de racismo. Los patrones y ritmos del activismo antirracista pueden hacerse más visibles y experimentar tensiones, sacudidas y reconfiguraciones justamente en situaciones de profundización de la conflictividad alrededor de una vivienda asequible o en torno a eventos violentos que involucran a gente negra, ya sea como víctimas o que estereotipa a vecindarios y barrios enteros como perpetradores (Ferreira Da Silva 2010, 164).

LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN NEGRA EN BOGOTÁ

En 2009, el Observatorio de Discriminación Racial (ODR) de la Universidad de los Andes compuso un informe sobre la situación de la población negra en el país con base en indicadores demográficos, sociales y económicos contruidos a partir del análisis del Censo General 2005, la Encuesta de Calidad de vida de 2003 y la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2007. Los resultados arrojaron disparidades prominentes entre la población negra y no negra (blanco-mestiza), en temas como la mortalidad infantil, el desplazamiento forzoso, el analfabetismo, la vivienda y el mercado laboral. Por su parte, y basándose en las mismas fuentes, los investigadores Fernando Urrea-Giraldo y Carlos Viáfara López (Universidad del Valle) han realizado un análisis estadístico de desigualdades sociodemográficas y socioeconómicas en siete municipios (Bogotá D. C., Buenaventura, Cali, Cartagena, Medellín, Pereira, Quibdó y el departamento de San Andrés y Providencia). Estas áreas metropolitanas se eligieron por cuanto son representativas de diferentes escalas de presencia negra o afrocolombiana en términos del peso demográfico. En general, los autores observaron un efecto fuerte y significativo de las diferencias en las dotaciones de capital humano, lo que explica una gran proporción de las disparidades raciales en el limitado acceso al sector formal y, en sentido inverso, la sobrerrepresentación en el sector informal de la economía (Viáfara López, Urrea-Giraldo y Correa Fonnegra 2009).

En Bogotá la población afrocolombiana presenta las características de una población migrante altamente selectiva, con sobreconcentración entre los 20 y 44 años y una significativa menor participación porcentual de los menores de 20 años. Es una ciudad donde las diferencias en las tasas de desempleo son más altas para los afrocolombianos (35,4%), y en las mujeres afrocolombianas es un 55,4% más alta que frente a las no afrocolombianas. Mientras el 55% de las mujeres negras o afrocolombianas trabaja —principalmente en oficios domésticos—, el 46% de las mujeres no identificadas como tales, lo hace (Viáfara López, Urrea-Giraldo y Correa Fonnegra 2009, 182). La desigualdad de condiciones en que las

mujeres negras se desenvuelven en el mercado laboral en las grandes ciudades, sugiere que ellas acceden a empleos con salarios más bajos, situación que se mantiene inclusive si el nivel de escolaridad es igual al de las mujeres no negras. La población afrocolombiana tiene un alto porcentaje de personas asalariadas (76%), sus empleos son precarios y tienden a ser de baja calificación y remuneración, así como de alta rotación (Bogotá 2011).

De acuerdo con los cálculos derivados de la información proveniente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2011 la población afrocolombiana en Bogotá representaba el 1,5% de la población total de la ciudad; esto es, 97.886 personas (León 2011, 56). La cifra era cuestionada por organizaciones del movimiento social afrocolombiano, por reconocidos centros de investigación como el Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica (Cidse) e inclusive, por el propio Estado en el ámbito distrital en los documentos de política pública que admitían que estas estadísticas nacionales no concordaban con los cálculos realizados por las organizaciones afro en el Distrito. El porcentaje de personas negras en Bogotá, según otras fuentes, podría estar entre el 10 y el 15% de la población total de la ciudad. Indicadores como estos sugerían que en Bogotá la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera se encontraba en un nivel de desigualdad más alto en relación con el resto de la población, especialmente, en los temas de la educación, el empleo y la salud. El grueso de esa población se concentraba entre las edades de 20 a 50 años, con reducido número de personas menores de 20 años y mayores de 60 años. También había una tendencia a la concentración en las localidades de Engativá, Suba, Bosa, Kennedy, San Cristóbal y Ciudad Bolívar (Bogotá 2012, 6). Hace casi veinte años, esas localidades ya registraban una proporción significativa de población negra cuya movilidad rural-urbana e intraurbana parecía ser una característica importante dentro del comportamiento demográfico (Arocha *et al.* 2001).

Al principio de la década de 2010, las acciones colectivas en cabeza de lideresas y líderes afro que rechazaron abiertamente todo aquello que degradaba el vivir de la gente negra en la ca-

pital, emergieron en la deriva e incertidumbre en que habían gravitado las consultivas departamentales y nacionales, la consultiva distrital de Bogotá, las dos curules en el Congreso de la República y otros mecanismos de representación y participación política para las poblaciones negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. En 2012, el problema de acceder y permanecer en una vivienda no era nuevo, pero las fricciones y disputas entre grupos diferentes y diferenciados que negociaban la copresencia en la urbe había adquirido una relevancia nunca antes alcanzada en la agenda del gobierno y la convivencia ciudadana. En localidades donde se han concentrado problemas de pobreza, desigualdad y exclusión urbanas, líderes y lideresas de trayectoria (y otros en formación) desarrollaron estrategias de inserción de la población negra en la ciudad, así como mecanismos para el acceso a la vivienda, la educación y el trabajo. Cuando la proximidad física con grupos no negros desencadenó en violencia, mediaron en esos conflictos y demandaron a las entidades la incorporación del enfoque diferencial étnico-racial, señalándoles a los funcionarios y contratistas del Distrito que ya la Corte Constitucional venía ordenándole eso al Estado en la sentencia T-025 de 2004 y en el Auto 005 de 2009.

La notoriedad que alcanzaron a tener ciertas experiencias de racismo cotidiano e institucional se debió principalmente al reclamo y la protesta de los sectores afros en Bogotá. A su vez, esa notoriedad revitalizó estrategias políticas y formas de acción que llegaron a converger en agendas concertadas entre agrupaciones afrodescendientes de base y poder popular, para traducirlas en políticas públicas y expandir las fronteras de la política institucional. Sin embargo, la profundización de la desigualdad urbana tras la prolongación del conflicto armado, el desplazamiento forzado, entre otros factores estructurales, ha derivado en la validación estatal de la injusticia, principalmente en la precariedad habitacional y los patrones de abuso policial hacia la población negra de la ciudad. Esto echa un manto de dudas sobre la viabilidad actual de los mecanismos institucionales y desarrollos jurídicos y legales anti-discriminación, así como sobre las políticas de acción afirmativa

o discriminación positiva tendientes a convertirse en mecanismos de reparación histórica.

CRIMINALIZACIÓN RACIALIZADA

El 21 de enero de 2012, representantes de la mesa local de Suba (conocida como la Federación de organizaciones afros de la localidad de Suba, Fedeaafrosuba) y Rudecindo Castro (entonces jefe de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital), se reunieron con el fin de tratar un delicado asunto que se presentaba en el sector de El Rincón. Esta es una agregación de barrios que en la jerga tecnocrática de la planeación urbana se conoce como Unidad de Planeación Zonal (UPZ). El asunto, catalogado por las autoridades como de «convivencia ciudadana», tenía que ver con el señalamiento que varias juntas de acción comunal y líderes blanco-mestizos (no negros) habían hecho a la población negra, al responsabilizarla de la inseguridad, el pandillismo y el microtráfico de drogas que se presentaban en todo el sector. En diciembre de 2011, un grupo de vecinos dirigió una carta a Clara López, entonces alcaldesa encargada de Bogotá, en la que se leía en letras mayúsculas:

«LOS NEGROS ESTÁN ATRACANDO Y MATANDO
A LOS BLANCOS EN EL RINCÓN»

Para Rudecindo Castro, el jefe de asuntos étnicos, se trataba de una forma habitual de identificar a un grupo/clase peligrosa «por naturaleza» dentro del discurso público de la seguridad ciudadana. Esa no era la primera ni la última reunión en donde los participantes clamaban por la resolución pacífica de un conflicto étnico-racial. En otras localidades como Rafael Uribe, San Cristóbal, Bosa, Engativá y Usme, también se presentaban riñas entre pandillas, querellas entre propietarios y arrendatarios, problemas asociados a la ocupación del espacio público, a la deficiente cobertura de servicios de salud, educación, servicios públicos y transporte y a las llamadas «fronteras invisibles» trazadas por estructuras armadas coercitivas que participan en las redes del microtráfico de drogas y

otros actos delictivos. Líder de reconocida trayectoria y conocedor de las brechas en el movimiento negro, Castro había actuado como interlocutor clave en varias de esas reuniones en las que reconoció en las mesas locales una forma de acción colectiva vinculada a las manifestaciones concretas de conflictos raciales aparentemente disgregados en los espacios barriales populares de la ciudad. La negatividad del fenómeno asociado a la presencia y circulación de la gente negra en la ciudad se había vuelto tan prominente que los medios masivos comenzaron a registrar noticias sobre violencia racial.²

El 24 de abril de 2015 el semanario *Voz* se refirió a la manifestación de un grupo de activistas en la plaza de Bolívar, en señal de protesta por el asesinato de dos jóvenes negros en el barrio Caracolí, en la frontera entre Soacha y Ciudad Bolívar.³ En este escenario paramilitarizado y de “limpieza” social cotidiana, dos sicarios en moto le dispararon a Edward Samir Murillo y Daniel Andrés Perlaza, ambos de 20 años. La revista *Semana*, por su parte, proporcionó detalles sobre las dos víctimas: habían llegado un par de años atrás a Bogotá, después de salir desplazados con sus familias de Guapi (Cauca) y Cértegui (Chocó) y eran parte de un grupo de danza folklórica. Ambos jóvenes iban hacia un centro de salud a pedir una cita para la mujer embarazada de uno de ellos. Antes de herirlos mortalmente, sus victimarios los llamaron despectivamente «negros», lo que para muchos de los protestantes es la evidencia de que se trató de odio racial. Dos días antes de las muertes de Caracolí, en el barrio El Claret de la localidad de Rafael Uribe, un hombre que decía odiar a los negros, asesinó a puñaladas a Jimmy Pontón, originario Jamundí, Valle. «Por ser negro lo mataron», concluyeron familiares de la víctima ante los medios de comunicación. Si ahondamos aún más en la vida de estas tres víctimas, encontraremos que

2 Véase: «Así se vive en la Bogotá negra». Consulta: 7 de octubre de 2013. http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/bogotnegra/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_MULTIMEDIA-13096689.html.

3 Véase: Racismo en Bogotá: «Un negro es un mal adorno para esta ciudad». Consulta: 18 de noviembre de 2013. <http://www.semanariovoz.com/2015/04/24/racismo-en-bogota-un-negro-es-un-mal-adorno-para-esta-ciudad/>.

el espectáculo de sus cuerpos yaciendo sobre su propia sangre es un teatro recurrente en las metrópolis del mundo. Es el epílogo de una vida plagada de problemas sociales, producto de las desigualdades sociohistóricas en la gente negra. Un hecho incuestionable que alerta sobre un orden jerárquico sociorracial poco cuestionado y normalizado (Mosquera 2010, 76-77).

La manifestación de aquel 16 de abril de 2015 no fue la primera ni la última. Los barrios de esas localidades en donde se ha venido concentrando la gente negra son difíciles por las pandillas, el tráfico de droga y la violencia cotidiana. En febrero de ese mismo año, un joven fue asesinado cerca a la iglesia de Egipto y en Rafael Uribe Uribe las organizaciones registraron la muerte de jóvenes negros, de a uno por año, desde 2010. Otras víctimas que han sobrevivido a grupos de “limpieza”, neonazis y pandillas, aseguran que panfletos como el de «negros hps, los vamos a erradicar», los insultos y los avisos de «no se arrienda a negros», indican que agresiones, burlas, asedios, exclusiones y homicidios mucho tienen que ver con el color de la piel, pese a que las autoridades pretendan minimizar el problema. Alcaldes locales y funcionarios han controvertido la idea de que estos y otros crímenes son por racismo, como lo han denunciado miembros de la comunidad negra y sustentan esta negativa aludiendo al contexto de la criminalidad y a los antecedentes penales en seis de los ocho casos registrados denunciados en 2015 por el Movimiento Cimarrón⁴ como crímenes de violencia racial.

Un mes después, *El Tiempo* publicó otro artículo en el que aseguraba que las versiones de líderes y activistas negros sobre la oleada de crímenes por racismo, «había perdido validez»⁵ porque, en

4 Asociación nacional creada en 1982 con el objetivo de promover la defensa y el ejercicio de los derechos humanos y étnicos de la población afrocolombiana y en pro de la eliminación del racismo y las discriminaciones. Se enfoca en la creación de asociaciones comunitarias de base, la formación de líderes y lideresas con conciencia identitaria, programas de fomento de la etnoeducación y la enseñanza de los estudios afrocolombianos en el sistema escolar y en la movilización e incidencia organizativa y comunitaria para la reivindicación, gestión y aplicación de la agenda social y política cimarrona y afrocolombiana. Ver: <https://www.movimientocimarron.org/>.

5 Ver: <http://www.eltiempo.com/bogota/asesinatos-en-bogota-pierde-fuerza-version-de-crímenes-por-racismo/15670498>.

seis de los ocho casos, las víctimas tenían antecedentes criminales. Para la Policía Nacional, las riñas, *vendettas* y ajustes de cuentas por microtráfico en las que caen los jóvenes negros, nada tienen que ver con el racismo, sino con la identificación criminal de las víctimas mismas. Este juicio nos devuelve a la queja de los vecinos del Rincón de Suba que culpan a los negros del aumento de la criminalidad en el sector. Los medios hegemónicos proveen una auténtica plataforma para que esas ideas germinen en la opinión pública.

La criminalización racializada que estigmatiza a la gente negra por supuestos comportamientos disfuncionales y violentos es una de lógica racial constantemente invocada para racionalizar el estatus degradado de la vida negra en que se basan todo tipo de sospechas y abusos. Es un discurso arraigado en los embates punitivos de la educación que sanciona niños y jóvenes y los aboca a la expulsión o la deserción escolar (Taylor 2017, 129). También contribuye a sobrerrepresentar a la gente negra en los índices de pobreza y desempleo, a medida que los estereotipos sobre criminalidad e ilegalidad reproducen la llamada «discriminación estructural» que se manifiesta en las abismales desigualdades sociales entre grupos dominantes y grupos marginalizados (Massey y Denton 1993; Danziger y Gottschalk 1995). En los últimos años, el desarrollo neoliberal y el impacto desproporcionado del conflicto armado ocasionó que las condiciones de vida de las personas, familias y territorios de los pueblos negros empeoraran.

La relación entre criminalidad y raza está naturalizada en las representaciones que las autoridades policiales hacían, a propósito de los cuerpos de personas negras muertas en la urbe y en los conflictos de seguridad y convivencia en la ciudad. La carta firmada por 52 vecinos que residen entre las calles 125B y 131, entre carreras 91A y 93A (Suba), que fue enviada a la Alcaldía Mayor a finales del 2011, se refiere a que los negros allá no trabajan, pero sí se los ve atracando los fines de semana, después de las 10:00 de la noche. Parte constitutiva del sentido común colectivo, la práctica estigmatizante de ligar el crimen a los negros, refuerza y reproduce los abusos de las autoridades que emplazan sus aparatos policiales

para controlar a poblaciones sospechosas, así como la intimidación de grupos armados que someten a esas poblaciones a una suerte de confinamiento decretado en entornos sociales hostiles. La difundida y ampliamente asumida caracterización de la gente negra como vagos estafadores racionaliza las disparidades económicas y sociales entre los afros y el resto de la población, eximiendo de cualquier responsabilidad a los sistemas políticos y económicos (Taylor 2017, 59). Estar en grupo, escuchar música, ha sido motivo de sospecha y razón suficiente para ser abordados por una patrulla.

En junio de 2013, un grupo de policías destruyó la casa de Marino Agudelo y su familia. Se trataba de una de las familias barbacooanas (provenientes del litoral Pacífico sur de Colombia) que fueron reubicadas en el barrio La Fiscala de la localidad de Usme. Marino y su familia venían de un asentamiento ilegal llamado «Nueva Esperanza», en la localidad vecina de Rafael Uribe Uribe. Desde que llegaron a La Fiscala, los vecinos no los querían en la cuadra y la policía tampoco. Un domingo de mayo de 2013, Marino había regresado de un arduo trabajo como minero en el Bagre, Antioquia. Departía con su familia y amigos cuando a las 6:30 de la tarde unos policías golpearon en la puerta y ordenaron apagar la música: «Micos hijueputas, apaguen eso». La familia ofendida no hizo caso y los policías comenzaron a arrojarles piedras a la casa.

[...] Estábamos aquí sentados escuchando música. Yo hablaba con mis hermanos y mi vecina. A las 6:30 de la tarde llegaron unos policías a golpear en la puerta y a decir que apagaríamos la música. Yo le dije que por qué si yo no le hacía nada a nadie. Yo vengo cada 8 días porque trabajo fuera de Bogotá y vengo a visitar a mi familia. Los agentes no quisieron escuchar y me dijeron otra vez y en un tono muy fuerte, que apagara la música. Como no hicimos caso, empezaron a arrojarnos piedras a la casa. Cuando nosotros salimos a pedirles que dejaran de arrojar piedras, ellos nos tiraron unas piedras más grandes y nosotros se las devolvimos [...]»⁶

«Devuélvanse pa'l monte», les gritaban los agentes. Los vecinos habían salido a ayudarles a destruir la fachada de la casa. Uno de los hijos salió a devolverles las pedradas a los agentes y en menos de cinco minutos la cuadra se llenó de más policías. Cuando sonaron

6 Entrevista con Marino Agudelo. Bogotá, mayo de 2013.

disparos y vieron caer los gases lacrimógenos dentro de la planta baja de la vivienda, la familia se atrincheró en el segundo piso. Los policías tumbaron la puerta, luego revolcaron y desbarataron la casa de Marino. Un sobrino suyo recibió un balazo en una pierna y fue sindicado como guerrillero. Marino tuvo que quedarse en Bogotá para ayudar a sacar a su sobrino de la cárcel y para acompañar a su esposa y a su hija, pues las dos quedaron conmocionadas después del incidente. Un mes más tarde, Marino perdió su trabajo y su sobrino aún seguía preso. Nadie pagó por los daños materiales y morales causados.⁷

En Bogotá, los hogares negros han vivido abrumados por formas más violentas de discriminación que incluyen la habitual mezcla de violencia policial, pobreza y viviendas precarias. Cientos de riñas y conflictos en tal contexto han sido identificados por la Secretaría de Gobierno del Distrito como problemas de seguridad y convivencia, principalmente en los barrios. A finales de los años noventa, la carga emocional de la discriminación incidía en el hecho de que la gente ejerciera la «voluntad del olvido» (Mosquera 1998, 72; Arocha *et al.* 2001, 57). Empero, esto cambió a principios de la década de 2011, años en que el tema del racismo en Bogotá promovió debates que registró la opinión pública. Lo anterior radica, en parte, en el hecho de que la violencia y la discriminación hoy sean más prominentes. En las diferentes localidades han existido organizaciones afro creadas para intentar hacerle frente a problemas como la seguridad, la discriminación, la falta de empleo y la dificultad para el acceso a la vivienda, entre otros. Estas organizaciones se crearon para resolver esas situaciones en las localidades, pero sin acceso a espacios de interlocución con el gobierno local o distrital. En realidad, muchas se habían distanciado de los viejos y acomodados liderazgos afro en el Distrito Capital que hicieron carrera en el movimiento negro desde los años noventa y que durante los sucesivos gobiernos habían acumulado conexiones y relaciones influyentes. En suma, eran liderazgos acostumbrados a

7 Véase: Personas, no micos. Consulta: junio 26 de 2013. <http://www.elespectador.com/opinion/personas-no-micos>.

tomar decisiones con muy poca incidencia para las bases y a no escuchar y acatar las orientaciones que provenían de esas mismas bases. En busca de estrategias para enfrentar esos problemas, los líderes comenzaron a crear unos espacios que llamaron «mesas locales» donde discutían y concretaban proyectos culturales, deportivos, productivos o soluciones para problemas o situaciones específicas en las localidades.

La creación de mesas locales afro en algunas localidades de Bogotá buscaba una articulación entre las diversas organizaciones afro que existen en estas localidades y la consolidación de espacios de representación y concertación con los gobiernos locales. Había mesas locales en San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño y Suba, como formas autónomas de reflexión y acción frente a los problemas de la cuadra, del barrio, del colegio o del espacio de trabajo dentro de la localidad. A las mesas no las motivaba la necesidad de conseguir proyectos con la administración, sino la criminalización racializada, el desempleo, la llegada de más afros desplazados y la estigmatización racial en que se desenvolvía todo aquello.

Estas mesas realizaban reuniones mensuales donde discutían una agenda determinada, que iba desde proyectos en desarrollo, propuestas de proyectos y problemas de la localidad. Asistían personas y representantes de organizaciones. Algunas mesas contaban con la presencia permanente de delegados de la alcaldía, gestores culturales, delegados de hospital y referentes de la Dirección Distrital de Asuntos Étnicos. También tenían invitados de las secretarías de cultura, de integración social, del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal –IDEPAC– y de otras instituciones privadas y públicas. Las organizaciones que conformaban las mesas se dedicaban a la visibilización de prácticas culturales afro (danza y música), a los proyectos productivos y de generación de ingresos (iniciativas de negocio, vendedores ambulantes), proyectos deportivos, de mujeres, de jóvenes y de víctimas. También de generación de ingresos y de apoyo a las personas víctimas del conflicto que llegan a la ciudad, jardines infantiles y comedores comunitarios. En suma, las mesas locales trabajaban en un sinnúmero de cuestiones

vinculadas a la discriminación racial y con cómo aquella daba forma a las estrategias de organización.

INQUILINOS ERRANTES

Hace poco más de diez años, los contrastes evidenciados al cotejar las condiciones económicas de la gente negra en la capital con respecto a las del resto de la población, constituían indicios estructurales de los patrones de discriminación sociorracial en Bogotá. Según Arocha *et al.* (2001, 93), en la metrópoli la gente de ascendencia africana trabajaba más que el resto de la población, recibía menos ingresos por su esfuerzo y registraba menores niveles de escolaridad que el resto. Posteriormente, los datos del censo 2005 corroboraron esos indicios en varias ciudades colombianas en donde la población negra o afrocolombiana estaba sobrerrepresentada entre las más pobres de la sociedad colombiana (Viáfara López, Urrea-Giraldo y Correa Fonnegra 2009).⁸

Estos conflictos también hacen parte del problema de la vivienda. Un estudio en 2010 dedujo de las fuentes oficiales que la población negra o afrocolombiana residente en localidades como Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Engativá, vivía en los estratos más bajos y deprimidos (Ríos 2011). El problema de acceso a la vivienda, la marginalidad de los espacios dentro de barrios y unidades zonales y las relaciones marcadas por la estereotipia y la exclusión con vecinos y arrendatarios, todo lo cual hace del tema uno de los casos de racismo más referenciado (Arocha *et al.* 2001). Las personas negras llegan a vivir donde familiares o amigos y arriendan en lugares cercanos porque es una forma de mantener la red, la cercanía, de ayudarse y porque también enfrentan la gran dificultad de arrendar un lugar para vivir pues casi nadie quiere arrendarles a personas negras porque «son muy bulliciosos» o «se le arrienda a uno y terminan viviendo veinte», excediendo con ello lo acordado en los

8 De acuerdo con los resultados del censo 2005 realizado por el DANE, en Bogotá, el porcentaje de mujeres negras o afrocolombianas que ocupan empleos de servicio doméstico es del 13% mientras que el resto de las mujeres es del 2.5% (Viáfara, Urrea y Correa 2009, 192).

contratos de arrendamiento. En este último caso, precisamente por las prácticas de solidaridad, suelen recibir a sus familiares y amigos que llegan a Bogotá en sus casas. La estrategia para conseguir vivienda en Bogotá es a través de esas redes familiares y de paisanaje. En algunos casos los arrendadores optan por aumentar el arriendo o por cortar los servicios públicos. En localidades como Suba se encuentran letreros de «No se arrienda a negros» o «Se arrienda a NN» es decir a no negros.⁹

Ante esta situación existían propuestas como la de la Federación de Organizaciones afros de la localidad de Suba (Fedeafrsuba) de actuar como intermediaria en las gestiones relacionadas con el arrendamiento de inmuebles en los barrios de la localidad. Es decir, que fuese a través de estas organizaciones defensoras que las personas negras accedieran a la vivienda en calidad de arrendatarios. La federación se había conformado en 2010 en busca de acceso a la planeación participativa de proyectos para la localidad. De acuerdo con el líder Luis Fernando Valencia, como alternativa a los conflictos residenciales, Fedeafrsuba proponía una política de arrendamiento basada en un modelo que ya estaba operado en Cali. Consistía en que el arrendamiento se hiciera a través de una asociación cuyos afiliados reclamarían el acceso a la oferta institucional y atención integral a los problemas sociales de los barrios.

Alrededor de la vivienda se entretejía un conflicto que había adquirido cierta visibilidad en la opinión pública. La prensa permitía rastrearlo a partir de acontecimientos que sugerían algún debate.

[...] Penas severas y campañas educativas son algunas de las propuestas del Distrito para mitigar el histórico flagelo. «Se arrienda, pero no a negros». Así se lee en uno de los letreros de alquiler de vivienda en el barrio Santa Rita, en la localidad de Suba. En pleno 2011, luego de cinco siglos de la época de la Colonia, tras dos siglos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pasados 160 años de la abolición de la esclavitud en Colombia, más de 60 años después del surgimiento de la Organización de Naciones Unidas y 20 del fin del *Apartheid* en Sudáfrica [...] ¹⁰

9 Ver: Una mirada a la violencia en los 'barrios de negros'. Parte de la población afro es señalada de cometer delitos. Ellos se declaran agredidos por su color. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13119464>. Consulta: 22 de junio de 2021.

10 Véase: Oscuro panorama del racismo. En pleno Año Mundial de los Afrodescen-

Pero el problema no era únicamente en cuanto a las relaciones entre los negros inquilinos y los propietarios de casas no negros. La inadecuación y habitabilidad precarias de los espacios residenciales urbanos (falta de servicios públicos domiciliarios, zonas de alto riesgo, formas de construcción que no son seguras para vivienda, hacinamiento, etc., también hacían parte del conflicto alrededor de la vivienda. Conflictos que afectaban también a la población negra de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3¹¹ en las localidades de Suba y Engativá (las que registraban el mayor tamaño demográfico). Las historias de estos habitantes son la migración forzada, la vida cotidiana en zonas precarias –sin servicios públicos y en viviendas poco adecuadas– donde han reproducido las condiciones de pobreza y los problemas para vincularse a empleos formales. Las trayectorias urbanas mucho tienen que ver con empleos informales (venta ambulante) y en un sector, con actividades ilegales (robo, tráfico y expendio de droga), hecho que repercute, a su vez, de manera negativa, en la estigmatización grupal y las políticas de seguridad, convivencia y espacio público de la ciudad.

Las historias de algunos de los líderes insinúan que los negros cambian constantemente de casa en las localidades que habitan. No se tienen datos en ese sentido, pero los relatos de inquilinos errantes sugerían una alta movilidad residencial en la población negra y que las localidades con mayor peso demográfico eran las mismas en donde se daba esta dinámica, probablemente muy relacionada con la dificultad asociada a los arriendos. Otro problema de vivienda es el hacinamiento pues viven varias familias en una misma casa para ahorrar dinero. En Colombia no hay información sistemática ni fidedigna sobre la situación de la vivienda de la población afro en los estratos bajos. Las autoridades distritales y nacionales no cuentan con ningún registro de las personas negras que acceden al subsidio

dientes, *El Espectador* comprobó la discriminación racial en la capital. Consulta: 21 de julio de 2013. <http://www.elespectador.com/noticias/bogota/oscurito-panorama-del-racismo-articulo-261845>.

11 Según el Departamento de Planeación Nacional de Colombia, los estratos socioeconómicos en los que se pueden clasificar las viviendas o los predios son seis. Pertenecer al estrato uno significa bajo-bajo, el dos es bajo, el tres es estrato medio-bajo, cuatro es el estrato medio, cinco es el estrato medio alto y seis, el estrato alto.

de vivienda en general, ni tiene información sobre subsidios solicitados, asignados o entregados a esta población. De ahí que frente a la solicitud hecha por el Observatorio de Discriminación Racial (ODR) de la Universidad de los Andes, la Secretaría de Hábitat de Bogotá, afirmara no haber encontrado ningún indicador que relacione la variable de vivienda con la variable étnico-racial (Alfonso Sierra, Cavalier Adarve y Rodríguez Garavito 2009, 204).

Esta respuesta institucional frente al conflicto racial, es decir, la falta de información argumentada por el cuestionamiento sobre su relevancia, se contradice con la evidencia del problema de la vivienda en la población negra y las propuestas de las organizaciones, como la de crear una ciudadela étnica que busca que las casas se adapten a las condiciones y usos culturales propios, además de que las personas puedan acceder a una vivienda propia y productiva. El 27 de febrero de 2012, Virgelina Chará, una líder negra de reconocida trayectoria,¹² promovió una «mesa de diálogo comunitario intercultural» en la localidad de Suba, con el fin de que las instituciones y las partes del conflicto llegaran a un acuerdo.¹³ Las inconformidades de la comunidad blanco-mestiza con la comunidad negra comenzaban en la convivencia diaria: eran conflictos de sonoridad (el excesivo ruido por el volumen de la música) y familiaridad (elevado número de inquilinos por fuera del acuerdo contractual) que resultaba en el incumplimiento de contratos verbales de arrendamiento. La estigmatización de que los negros son un problema se desarrollaba a tal punto que la criminalidad adquiriría un matiz de violencia racial.

Durante la reunión, Virgelina expuso las quejas de la comunidad negra frente al tema de la vivienda. Denunció que en Bogotá existen filtros que impiden que personas negras accedan a la vivienda en contextos urbanos:

12 Virgelina Chará ha sido la coordinadora de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer, la Juventud y la Infancia, que trabaja, entre otros, con víctimas de desplazamiento y familiares de desaparecidos.

13 Véase: la columna «Virgelina», de Jaime Arocha, en *El Espectador*. Consulta: 4 de marzo de 2013. <http://www.elespectador.com/opinion/virgelina>.

[...] Nosotros los negros pagamos por el arriendo de una vivienda pero eso es para que los dueños nos secuestren: no puede entrar ni recibir visitas de nadie, tenemos que acostarnos a la hora que el dueño diga y todo eso es porque a nosotros no nos ven como arrendatarios sino que prácticamente estamos es de posada. Así nos hacen sentir [...] ¹⁴

En las víctimas del conflicto armado, esta situación redonda en un conjunto de hecho re-victimizante que violenta el derecho a la diferencia. En abril de 2013, el Consejo Comunitario Rescate Las Varas del Municipio de Tumaco (Pacífico Sur) recurrió a la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras, Palenqueras y Raizales. Se habían involucrado en la sustitución de cultivos de coca mediante proyectos de seguridad alimentaria y exploraban modelos de fortalecimiento de la identidad local. De ahí el reconocimiento de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación, y de los ministerios del Interior y de Justicia. Sin embargo, la lectura de la entonces guerrilla de las FARC-EP fue otra. El proyecto de sustitución de cultivos de coca era parte de la estrategia del gobierno de crear redes de informantes, por lo que el consejo comunitario fue declarado objetivo militar. Desterrados en Bogotá, sus miembros apelaron a la Unidad de Atención a Víctimas, pero los funcionarios de esa entidad vacilaron a la hora de brindar atención diferencial inmediata. Para estos burócratas importó poco la vulnerabilidad emocional que ocasionaba la discriminación racial, una de cuyas manifestaciones consiste en la renuencia de los propietarios a arrendarles a personas negras. Se explica así su dispersión por la ciudad, no obstante, la urgencia de estar unidos para acudir a las agencias del Estado. ¹⁵

El caso de Virgelina Chará es el de otra líder que se forjó durante los años del dramático destierro que significó la puesta en funcionamiento de la represa La Salvajina en el municipio de

14 Intervención de Virgelina Chará en la mesa de diálogo comunitario intercultural que tuvo lugar en febrero de 2012.

15 Véase la columna «Personas, no micos», de Jaime Arocha, en *El Espectador*. Consulta: 10 de junio de 2013. <http://www.elespectador.com/opinion/personas-no-micos>. Véase también el video que acompaña este informe de investigación, titulado «Ciudadanía étnicas: afrocolombianos»: <https://www.youtube.com/watch?v=Dz-dAk37RaYs>.

Suárez, Cauca, a mediados de los años ochenta. La construcción de Salvajina dejó como damnificados en ese entonces a más de 6000 personas, entre campesinos, indígenas y afrocolombianos de los municipios de Suárez, Morales y Buenos Aires, generando el desplazamiento de cientos de familias que perdieron sus viviendas, fincas y minas. A raíz de ese despojo, buena parte de la población afro se concentró en el Distrito de Agua Blanca en el nororiente de Cali. Allí vivió Virgelina con sus hijos hasta que las amenazas de grupos armados la llevaron a mudarse a Bogotá. Desde hace quince años se ha dedicado al trabajo comunitario y político organizativo al frente de la Asociación Mujer y Trabajo.¹⁶

Otro es el caso de Luis Amú, líder barrial de la comuna 5 de Buenaventura. Cabe agregar que Buenaventura es la principal ciudad en la región del litoral Pacífico colombiano, que posee la zona portuaria más grande de Colombia y que es la ciudad donde el 80% de su población mayoritariamente afrodescendiente se encuentra bajo la línea de pobreza extrema (Centro Nacional de Memoria Histórica 2015). Por oponerse a la reubicación de la zona de bajamar para la ampliación del muelle y a la construcción de un moderno malecón, Luis fue amenazado varias veces por jefes de grupos paramilitares que desde hace décadas llevan un plan de exterminio y desterritorialización en la zona rural y urbana del municipio bonaverense.¹⁷ Él y su familia sufrieron varios atentados y tuvieron que venirse a Bogotá. Desde hace cuatro años ha tenido que cambiar de casa constantemente, viviendo en varias localidades como Santa Fe, Candelaria, Engativá y otras. A Buenaventura ya no puede volver. En Bogotá se ha conectado con organizaciones afro de víctimas.

Los líderes y lideresas de las organizaciones afro han llegado a la ciudad desde diferentes lugares del Pacífico colombiano, el lito-

16 Véase: la columna «Virgelina», de Jaime Arocha, en *El Espectador*. Consulta: 4 de marzo de 2013. <http://www.elespectador.com/opinion/virgelina>.

17 De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1990 y 2014, Buenaventura fue la urbe con el mayor índice de desplazamiento intraurbano e interurbano de toda Colombia. La cifra fue de 152.837 personas desplazadas, a lo que se suman 26 masacres, 475 víctimas de desaparición forzada y 4799 homicidios para el mismo período (Centro Nacional de Memoria Histórica 2015, 214).

ral Caribe y los valles interandinos. Han participado en procesos organizativos en sus lugares de origen y a su llegada a la ciudad buscan también organizarse para enfrentar los problemas. Esas experiencias organizativas rurales, de trabajo comunitario sirvieron de base para articularse y organizarse en la ciudad. Algunos están en la urbe desde hace varias décadas y otros, que arribaron más recientemente, han sido víctimas del desplazamiento forzado. Hay quienes han militado en movimientos políticos principalmente de izquierda y quienes han ocupado cargos administrativos.

En Bogotá, el tema de la vivienda se viene discutiendo desde hace años, ligado a los proyectos productivos y a la ética del parentesco que privilegia la familia extendida negra. Una ciudadela étnica afrocolombiana, consideran algunos, es un proyecto de alto impacto que dista mucho de la vivienda de interés social tipo «caja de fósforo». Virgelina habla de tres enfoques diferenciales para la gente negra: un enfoque diferencial étnico (la casa donde somos), el enfoque diferencial político (la casa que nos merecemos) y el enfoque diferencial productivo (la casa donde no nos endeudemos). La propuesta de la ciudadela étnica afrocolombiana en al menos cinco localidades fue cuestionada por un funcionario de la Secretaría de Hábitat de Bogotá, quien calificó el proyecto de racista, porque promueve la construcción de «bantustanes» o guetos para los negros. Esa misma entidad le comunicó a la líder Virgelina Chará que las comunidades no pueden competir con las constructoras en el desarrollo de proyectos de viviendas. Sin embargo, en 2008 guardó silencio y adujo falta de información frente a la discriminación habitacional de que es objeto la gente negra, así como con los conflictos entre arrendadores y arrendatarios que terminan en dramáticos desalojos.

En la localidad de San Cristóbal, Olga Perea, presidenta de la mesa local, denunció la negligencia de la Alcaldía Menor para revertir la exclusión de la comunidad negra en los encuentros ciudadanos de la localidad. La vivienda es escasa para las víctimas, razón por la cual se han presentado invasiones. Daira Benítez, quien vive desde hace tres años en el barrio Santa Rosa y desde hace ocho meses en una vivienda invadida, denuncia a la policía

de abusar de la fuerza al intervenir en estos desalojos. Todos estos casos llevan a preguntarse por las nuevas formas y procesos de organización racial de las diferencias en el espacio urbano. Estas tendencias de segregación espacio-racial, aunadas al fenómeno de la criminalidad, socavan los valores de apertura, accesibilidad, libertad de circulación, e igualdad de la ciudad moderna, lo que crea en su lugar un nuevo espacio público sustentado en relaciones de desigualdad, separación y control de los límites como valores organizativos (Caldeira 2001, 16).

Y TUVIMOS QUE HACER RESPETAR EL BARRIO

En septiembre de 2019, me entrevisté con uno de los líderes de las mesas locales de Usme que conocí entre 2012 y 2013, Felipe Jácome, quien había logrado asociar por un tiempo a los vendedores ambulantes negros de la localidad quinta y desde ese entonces conservábamos el contacto. Volvimos a hablarnos porque él se encontraba en una situación delicada y no tenía a quién acudir. Ni la Dirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital, ni la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras, Palenqueras y Raizales del Ministerio del Interior o cualquier institución, había intervenido en el conflicto que iba a describirme. Las instituciones ya no eran un referente para muchos líderes y lideresas que enfrentaban la discriminación habitacional, el comercio de drogas y el control policial violento, racialmente discriminatorio e injusto.

Compostela III es un asentamiento ilegal localizado en la localidad de Usme, al suroriente de Bogotá, con unos nueve años de existencia. En la parte alta vive gente que se autorreconoce como afrocolombiana, proveniente del Chocó y del Pacífico sur, principalmente. Los habitantes de la parte alta del asentamiento sostienen que han ido llegando por el «voz a voz» de la venta de lotes. Conscientes de que la compra de estos lotes había sido ilegal, ninguno de ellos hoy tiene papeles de los predios. La asimétrica distribución social del espacio, la precariedad laboral y la segregación racial llevan a que algunos habitantes urbanos opten por ocupar

permanentemente las laderas de los cerros orientales haciendo sus casas sobre barrancos, con techos irregulares y lonas sucias.

Los habitantes de la parte alta Compostela III han sufrido el conflicto armado, trabajos inestables, precarios, mal pagados y conflictos con arrendadores. Felipe me contó que estos ocupantes estaban a merced de despiadados traficantes de drogas que se valían del loteo ilegal como una forma de asegurar el control sobre las invasiones. En Compostela III, servicios públicos como el agua llegaron a las casas mediante una electrobomba que los habitantes tuvieron que pagar a «Jhon», un microtraficante de la localidad de Usme que controlaba puntos de venta de drogas en el sector de la cárcel La Picota, además de ser dueño de talleres de mecánica y parqueaderos de motos en el barrio El Danubio.

En Compostela III mandaban los «sayayines», nombre con el que se conoce en Bogotá a los individuos que operan en estructuras delictivas y criminales en torno al microtráfico. No solo se trataba de sustancias psicoactivas, sino también de armas y de celulares robados. Ellos mantenían centinelas apostados a la entrada de Compostela III y toda persona debía identificarse a la entrada. El elemento crucial de este caso es la tenaz resistencia negra que, bajo el liderazgo de Felipe, enfrentó a los microtraficantes. Conscientes de que mientras el asentamiento siguiera siendo una «olla» (lugar para el comercio ilegal de drogas), la institucionalidad distrital les voltearía la espalda en un eventual reclamo de reubicación digna o de legalización del tugurio, los hogares negros se negaron rotundamente a ser convertidos en expendio de drogas.

Aunque el asentamiento tiene una junta de acción comunal, esta parece no querer confrontar a los microtraficantes. De ahí que las reuniones y la organización de la gente negra estuviese totalmente escindida de esta forma de acción política comunitaria. Tras su acción colectiva de organizarse para resistir a ser encerrados en un gueto cercado por el estigma y la precariedad absoluta, buscaban salidas y aliados que contrarrestaran la privación del asentamiento.

[...] Nos hemos unido varios para no aceptar el vicio, ni a esos manes. Solo nosotros los negros lo hemos hecho: los blancos, los mestizos, tienen miedo. Nos ven a nosotros y algunos nos apoyan. Hoy somos un frente

de defensa del barrio. Como una especie de guardia cimarrona, porque los niches de Compostela III somos como una especie de palenque [...]»¹⁸

Felipe estaba en la mira de «Jhon» y otros microtraficantes porque se decía que estaba creando un frente de defensa negro. En el momento más álgido de la confrontación, «Jhon» fue asesinado en una disputa con otros grupos y se redujo temporalmente el expendio de droga. La quiebra momentánea del poder criminal sobre Compostela III le había dado a Felipe la oportunidad de hacer respetar el barrio mediante el apoyo de los vecinos, cansados de los vejámenes de los traficantes loteadores. Paradójicamente, el diario *Alerta* informaba que la muerte del «sayayín» era resultado de una pugna con «los niches, una banda dedicada al microtráfico y a la extorsión de comerciantes y demás personas». Al señalar a «hombres de tez oscura», este diario sensacionalista producía una efectiva estereotipia que tornaba sospechosa toda congregación o núcleo habitacional de afros en la parte alta de Compostela III.

Luego de contarme lo sucedido, evaluamos posibles rutas de acción para denunciar el caso a las instituciones. Fui tres o cuatro veces al asentamiento, en compañía de un grupo de estudiantes. Recorrimos las casas y hablamos con la gente que corroboró en líneas generales lo que ya me había contado Felipe. De hecho, un domingo en el que preparábamos un almuerzo comunitario en el solar del rancho en el que residía Felipe, una patrulla de la policía se apareció súbitamente. Los agentes, con perros agarrados en una mano y las pistolas desenfundadas en la otra, nos requisaron y solicitaron nuestras identificaciones. Luego nos dijeron que estaban en busca de unos delincuentes y que tuviéramos cuidado porque estábamos en un escondite de criminales. Sin mediar palabra con Felipe y con la otra gente, siguieron su camino. Ese día, luego del almuerzo, pensamos en estrategias que contuvieran el hostigamiento y el abuso policial. Había que descartar cualquier forma de autodefensa que algunos, empezando por el propio Felipe, ya contemplaban como una opción. Hablamos de la Ley N.º 1482

18 Entrevista con Felipe Jácome. Bogotá, 20 de octubre.

sobre actos de discriminación y sanciones. Alguien propuso que pegáramos textos de esa ley en las puertas y los frentes de las casas, con letras bien grandes. El siguiente fin de semana reunimos lonas y escribimos el artículo 134 A de la ley:

[...] El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes [...].

Felipe intuía que detrás de los microtraficantes y los medios de comunicación que estigmatizan la resistencia de la gente negra, había gente con poder. No se equivocaba. Algunos agentes de la Seccional de Investigación Judicial (SIJIN) –muchos de ellos funcionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con efectivos de la estación de policía del barrio Monte Blanco (Usme)– estaban ensañados con ellos. Los expendios en la parte baja eran demasiado visibles como para no ser combatidos por la policía, que solo concentraba sus acciones en la parte alta. El control territorial que perseguía el crimen organizado parecía estar apuntalado en una red de policías corruptos que querían controlar totalmente la parte alta, menos accesible y con más posibilidades de escapar y «encaletarse», esconderse. Desde que la parte alta de Compostela III dejó de ser controlada por las mafias, drones policiales sobrevolaban el asentamiento con la intención de vigilarlo durante el día y la noche. Agentes encubiertos de la Sijin subían a destruir los ranchos de la invasión sin previo aviso, con el pretexto de encontrar drogas y armas. Los allanados siempre eran los hogares negros y las diligencias bastante agresivas: los agentes agredían verbal y físicamente a las familias gritándoles «Negros HP, invasores que vivieron de otra parte».

Es probable que los textos de la ley antidiscriminación colgados en los frentes de las casas, las denuncias del caso al Observatorio de Discriminación Racial del Ministerio del Interior, la intervención de sus funcionarios en la localidad con los agentes que tratan asuntos de derechos humanos en la institución policial, hayan disminuido el control agresivo. Sin embargo, Felipe tuvo que salir de Compostela

tras un robo y amenazas contra su vida y desde entonces perdimos conexión con la gente del tugurio. En diciembre del año pasado fue la última vez que subí a la parte alta en compañía de mi amigo. Desde la entrada aprecié una cadena humana de hombres y mujeres se pasaban de mano en mano muebles, electrodomésticos y otros enseres que llegaban en carros de acarreo y que ascendían por la pendiente hasta coronar la parte alta. Una vez allí, había otra gente supervisando que cada dueño tomara lo que le correspondiera y lo llevara a sus respectivos ranchos. En la hondonada que se veía al llegar a la parte alta del cerro, había unos veinticinco nuevos ranchos parados. Todos eran hogares negros, mayormente, el litoral Pacífico.

CONCLUSIÓN

Una experiencia común entre las diversas poblaciones negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras es la experiencia vivida del racismo. La criminalización racializada y la precariedad habitacional de la gente negra en Bogotá han encendido, por momentos, la discusión sobre la persistencia de la desigualdad racial. El motor de esta discusión ha sido el de los conflictos sociorraciales en los barrios populares dentro de los cuales la gente negra ha sido víctima del racismo institucional y estructural. Las acciones colectivas emprendidas por movimientos de inquilinos y distintas organizaciones barriales se han hecho especialmente fuertes y visibles cuando se trata de combatir las escaladas de la injusticia racial. A principios de la década de 2011, estas acciones antirracistas reflejaban el amplio crecimiento de las organizaciones políticas negras como respuesta. Asimismo, el tratamiento de estos problemas en escenarios de la política y de la opinión pública era más frecuente y es probable que existiesen más canales efectivos para interlocución entre los funcionarios distritales y las alternativas locales antirracistas. Sin embargo, estas acciones colectivas se han fragmentado al no haber alcanzado sus objetivos de reducir las desventajas y desigualdades a través de las políticas públicas institucionales.

Toda la legislación específica para los afrocolombianos que conduce a la garantía de sus derechos, así como el aumento de la población afrocolombiana en Bogotá, llevó a que fuera la segunda ciudad de Colombia después de Cali en adoptar una política pública para su población afrodescendiente. Sin embargo, la esperanza y las expectativas sostenidas por las organizaciones negras con respecto a la implementación de esa política, se volvieron esquivas. Los efectos en cascada del racismo y la pobreza en las vidas de la gente negra de estratos bajos, han sido imparables. Personas marginadas, en situaciones crónicas de movilidad residencial, han sido víctimas de mayores y más abigarradas formas de abuso policial y discriminación habitacional. En 2012 había en la localidad de Usme una mesa de dieciocho organizaciones afro que se reunían mensualmente con funcionarios de la alcaldía local para discutir los problemas de la localidad y los proyectos a realizar. Hacia los últimos años de la década de 2011, es probable que los cambios de gobierno de la ciudad y el enfoque en los planes de desarrollo haya transformado la estructura de oportunidades política, desalentando con ello este tipo de esquemas de relacionamiento y llevando a una fragmentación organizativa y a la naturalización de la desigual situación de los negros, como lo evidencia el caso de Compostela III.

Es probable también que las ideas racistas estereotipadas sobre el gueto negro y sus residentes hoy calen más hondo en la forma como los servidores públicos, incluidos los policías, conciben la criminalidad. En contraste, en los últimos años decrecieron los argumentos estructurales sobre la desigualdad sociorracial que esgrimían con ahínco adalides de organizaciones en la base y que asumieron algunas instituciones comprometidas con los derechos al trabajo, la vivienda y la educación de la gente negra en situación de empobrecimiento. Aunque esté presente en la experiencia diaria de líderes y lideresas, los dilemas del racismo estructural son menos promovidos en las instituciones y en la opinión pública. En su lugar, parece estar instalándose con fuerza el pensamiento racista que considera los problemas como originados en las comunidades negras en lugar de verlos como problemas sistémicos de la sociedad colombiana. La concentración y los efectos de la pobreza negra

se convierten en excusa constante para el ejercicio de la violencia policial.

Los casos referidos son señal de que la fortaleza relativa de la acción colectiva negra ha emergido de la intensificación del racismo en enclaves barriales con escaso acceso a buenos trabajos, viviendas o escuelas. Las reacciones colectivas de la población negra, afrocolombiana raizal y palenquera, sus estrategias organizativas y sus repertorios de confrontación, se radicalizan en medio del empobrecimiento y la criminalización racializada. Disociados de los espacios de participación política y amplios frentes de convergencia, son la única respuesta frente a los obstáculos estructurales que plantean la segregación residencial, el abuso policial y la discriminación habitacional.

La complejidad y la especificidad del racismo institucional, y su pertinencia conceptual a la luz del caso expuesto, deriva de un sencillo interrogante: ¿por qué, pese a los esfuerzos pasados, los barrios donde habita gente negra en Bogotá D. C. la acción estatal es policial antes que una gestión sustentada en políticas públicas incluyentes? El hincapié en los innumerables modos en que la discriminación racial incide y configura las vidas cotidianas de la gente negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, especialmente en los trabajadores pobres, ha sido hasta ahora la única forma de contener las manifestaciones contemporáneas de ese racismo, así como el daño continuo que ocasiona. De este modo, aun cuando la pobreza se extiende a múltiples poblaciones, la pobreza negra generacional es diferente.

REFERENCIAS

Agier, Michel, Fernando Urrea Giral, Olivier Barbary, Odile Hoffmann, Pedro Quintín Quílez y Héctor Fabio Ramírez. 2000. *Espacios regionales, movilidad y urbanización, dinámicas culturales e identidades en las poblaciones afrocolombianas del pacífico sur y Cali. Una perspectiva integrada. Proyecto Cidse-Ird-Colciencias; Documento de Trabajo No. 52*. Cali: CIDSE, Centro de Investigaciones y Documentación Socio-Económica. Consulta: 18 de marzo 2019. <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/cidse-univalle/20121119043903/doc52.pdf>.

- Alfonso Sierra, Tatiana, Isabel Cavellier Adarve y César Rodríguez Garavito. 2009. «Raza y derechos humanos en Colombia. Informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombiana». En *Observatorio de Discriminación Racial (ODR)*. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, CIJUS.
- Arocha, Jaime, *et al.* 2001. *Mi gente en Bogotá. Estudio socioeconómico y cultural de la población afrodescendiente que reside en Bogotá*. Bogotá: CES, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia.
- Bogotá, Alcaldía Mayor. 2012. Plan distrital de desarrollo 2012-2014, Bogotá Humana.
- Bonilla-Silva, Eduardo. 2010. «¿Qué es el racismo? Hacia una interpretación estructural». En *Debates sobre ciudadanía y políticas raciales en las Américas negras*, editado por Claudia Mosquera Rosero-Labé, Agustín Laó-Montes y César Rodríguez Garavito, 649-898. Bogotá: Universidad Nacional.
- Caldeira, Teresa. 2001. *City of Walls: Crime, Segregation, and Citizenship in São Paulo*. Berkley: University of California Press.
- Castro, Rudecindo y Carlos Andrés Meza. 2017. *Calle Caliente: memorias de un cimarrón contemporáneo*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- Centro Nacional de Memoria Histórica. 2015. Buenaventura: Un puerto sin comunidad. Consultado: agosto 8 de 2020. <http://www.centro-dememoriahistorica.gov.co/micrositios/buenaventura/>.
- Cunin, Elizabeth. 2003. *Identidades a flor de piel. Lo «negro» entre apariencias y presencias: categorías raciales y mestizaje en Cartagena (Colombia)*. Bogotá: Icanh, Universidad de los Andes y Observatorio del Caribe Colombiano.
- Danzinger, Sheldon, y Peter Gottschalk. 1995. *América Unequal*. Cambridge: Harvard University Press.
- Dunaway, Wilma. 2003. «Ethnic Conflict in the Modern World-System: The Dialectics of Counter-Hegemonic Resistance in an Age of Transition». *Journal of World Systems Research* IX(I): 3-34.
- Ferreira Da Silva, Denise. 2010. «Despensar la existencia global: La analítica de la racialidad y la posibilidad de una justicia global». En *Raza, etnicidad y racismos: debates a la ciudadanía republicana en el marco de la conmemoración de los Bicentenarios de las independencias en las Américas negras*, editado por Editores CMRL, Agustín Laó Montes y César Rodríguez. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, sede

- Bogotá-CES, IDCARÁN; Universidad de los Andes-Observatorio de Discriminación Racial; Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas.
- Laó-Montes, Agustín. 2010. «Cartografías del campo político afrodescendiente en América Latina». En *Debate sobre ciudadanía y políticas raciales en las Américas negras*, editado por Claudia Mosquera Rosero-Labbé, Agustín Laó-Montes y César Garavito, 281-322. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Maguemati, Wabgou, Jaime Aricha Rodríguez, Aiden José Salgado y Juan Alberto Carabalí. 2012. *Movimiento social afrocolombiano, negro, raizal y palenquero: El largo camino hacia la construcción de espacios comunes y alianzas estratégicas para la incidencia política en Colombia*. Bogotá: Universidad Nacional.
- Massey, Douglas y Nancy Denton. 1993. *American Apartheid: Segregation and the Making of the Underclass*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Maya, Luz Adriana. 2009. Racismo institucional, violencia y políticas culturales. Legados coloniales y políticas de la diferencia en Colombia. *Historia Crítica* 39E: 218-245. <https://doi.org/10.7440/histcrit39E.2009>
- Melucci, Alberto. 2002. *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. Ciudad de México: El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos.
- Mosquera, Claudia. 1998. *Acá en Bogotá antes no se veían negros. Estrategias de inserción de la población negra en Santafé de Bogotá*. Bogotá: Observatorio de cultura urbana, Instituto Distrital de Cultura y Turismo.
- _____. 2010. «Introducción: la persistencia de los efectos de la “raza”, de los racismos y de la discriminación racial: obstáculos para la ciudadanía de personas y pueblos negros». En *Raza, etnicidad y racismos: debates a la ciudadanía republicana en el marco de la conmemoración de los bicentenarios de las independencias en las Américas negras*, editado por Editores CMRL, Agustín Laó Montes y César Rodríguez. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá-CES, IDCARÁN; Universidad de los Andes-Observatorio de Discriminación Racial; Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas.
- Mosquera, Claudia y Ruby Esther León. 2009. «Acciones Afirmativas en Colombia: entre paradojas y superposiciones de lógicas políticas y académicas». En *Acciones Afirmativas y ciudadanía diferenciada étni-*

- co-racial negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. Entre bicentenarios de las independencias y Constitución de 1991*, 1-50. Bogotá: Centro de Estudios Sociales -Universidad Nacional.
- Omi, Michael y Howard Winant. 1994. *Racial Formation in United States*. New York & London: Routledge.
- Pisano, Pietro. 2010. «Liderazgo político negro en Colombia: 1943-1964». Trabajo de grado, Maestría en Historia, Universidad Nacional de Colombia.
- Ríos, Mariana. 2011. «Segregación residencial; el problema social desde la perspectiva económica y urbana». Tesis, Maestría en Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia.
- Rodríguez Mir, Javier. 2012. «Los sinuosos caminos del racismo: El racismo ambiental en Argentina». *Revista de Antropología Experimental* 12. Consultado: 8 de junio de 2014. <http://revistaselectronicas.ujaeen.es/index.php/rae/article/view/1847>.
- Sawyer, Mark. 2006. *Racial Politics in Post-Revolutionary Cuba*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Segato, Rita Laura. 2010. «Raza es signo». En *Debates sobre ciudadanía y políticas raciales en las Américas negras*, editado por Claudia Mosquera Rosero-Labbé, Agustín Laó-Montes y César Rodríguez Garavito, 555-579. Bogotá: Universidad Nacional.
- Stolcke, Verena. 1995. "Talking Culture. New Boundaries, New Rhetorics of Exclusion in Europe". *Current Anthropology* 36(1): 1-24.
- Taussig, Michael. 1979. *Destrucción y resistencia campesina*. Bogotá: Punta de Lanza ediciones.
- Taylor, Keeanga-Yamahtta. 2017. *Un destello de libertad. From #blacklivesmatter to Black Liberation*. Chicago, IL/Madrid: Haymarket Books, Traficantes de Sueños.
- Tilly, Charles. 1978. *From Mobilization to Revolution*. New York: Random House.
- _____. 2002. «Repertorios de acción contestataria en Gran Bretaña: 1758-1834», en: Seminario de Investigación del Curso 2007-2008.
- Urrea, Fernando. 2011. «La conformación paulatina de clases medias negras en Cali y Bogotá a lo largo del siglo xx y la primera década del XXI». *Revista de Estudios Sociales* 39. www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123%20885X2011000200003&script=sci-abstract&tlng=es
- Van Dijk Teun. 1993. El racismo de la élite. *Archipiélago* 14: 106-111. Consultado: enero 16 de 2014. <http://www.discursos.org/Art/El%20racismo%20de%20la%20%E9lite.pdf>.

- Viáfara López, Carlos, Fernando Urrea-Giraldo Fe y Fonnegra Correa. 2009. «Desigualdades sociodemográficas y socioeconómicas, mercado laboral y discriminación étnico-racial en Colombia: análisis estadístico como sustento de acciones afirmativas a favor de la población afrocolombiana». En *Acciones Afirmativas y ciudadanía diferenciada étnico-racial negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. Entre bicentenarios de las independencias y Constitución de 1991*, 153-348. Bogotá: Universidad Nacional.
- Wade, Peter. 2008. "Race in Latin America". En *A Companion to Latin American Anthropology*, editado por Debora Poole, 175-192. Consultado: enero 13 de 2019. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781444301328>.



CARLOS ANDRÉS MEZA es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de Maestría en Antropología Social de la misma institución y especialista en Ambiente y Desarrollo Local de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Actualmente es investigador del Grupo de Antropología Social del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y profesor del Programa de Antropología de la Universidad Externado. Sus investigaciones se han enfocado en los escenarios contenciosos de la justicia ambiental, la etnicidad, la desigualdad racial y la movilización social de la población afrodescendiente de Colombia. Entre sus publicaciones figuran los libros *Tradiciones elaboradas y modernizaciones vividas por pueblo afro chococanos en la vía al mar* (2010) y *Calle Caliente. Memorias de un cimarrón contemporáneo* (2017), además de varios artículos.